

Bogotá, D. C., 11 de noviembre de 2020

Doctor  
**GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ**  
Presidente Cámara de Representantes  
Ciudad

Asunto: **Proposición de eliminación**

Respetado Señor Presidente:

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, proposición de eliminación del artículo 15° del Proyecto de ley N° 010 de 2019 Cámara - 005 de 2019 Senado "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones".

~~ARTÍCULO 15. — Modifíquese el artículo 408 de la Ley 599 de 2000, que trata sobre la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el cual quedará así:~~

~~"ARTÍCULO 408. VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.~~

~~En la misma pena incurrirá el contratista que intervenga en cualquiera de las conductas señaladas en este artículo."~~

Atentamente,



**JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ**

Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,  
Providencia y Santa Catalina  
Partido Cambio Radical.

## Motivación

El Artículo 15 que modificaría al artículo 408 de la Ley 599 del 2000 se refiere al delito de VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. La modificación propuesta es la siguiente:

*"ARTÍCULO 408. VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.*

***En la misma pena incurrirá el contratista que intervenga en cualquiera de las conductas señaladas en este artículo."***

De lo visto previamente se observa que el contratista que intervenga en cualquiera de las conductas señaladas previamente incurrirá en la misma pena señalada para el servidor público.

Respecto a la inclusión del contratista como sujeto activo del delito de la referencia, es errónea toda vez que solamente el servidor público es quien tiene la posibilidad de ser ordenador del gasto y de tener poder decisorio respecto a las decisiones que se adopten mediante el proceso contractual, igualmente como quiera que en las fases del mencionado proceso, trámite (planeación y selección del contratista), celebración del contrato (firma) ejecución y liquidación, el servidor público es el que posee la facultad de determinar la correcta realización de cada una de las etapas, previendo la revisión de inhabilidades e incompatibilidades. Así las cosas, no es correcto que se incluya al contratista como sujeto calificado de esta conducta.

Se advierte que si se pretende sancionar al contratista por una acción o hecho que afecte al proceso contractual solamente será necesario acudir a otro de los tipos penales, como por ejemplo, el de cohecho por dar u ofrecer, así mismo, también se podrá verificar si en la comisión del delito tuvo participación como interviniente o si podía ser asimilado como contratista que prestaba una función pública, lo cual es difícil que proceda la calidad de interviniente o de contratista que prestaba una función pública puesto que como se ha señalado solamente quien tiene la condición de servidor público puede estar en curso de cometer la conducta.